

IV CONGRESO NACIONAL DE DERECHO AGRARIO PROVINCIAL

SALTA – 1 y 2 de junio de 2017

Organizado por la Cátedra I de Derecho Agrario de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata y la Cátedra de Derecho de los Recursos Naturales de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Católica de Salta

RELEVANTES NOVEDADES JURISPRUDENCIALES EN LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES EN LA INTERSECCIÓN ENTRE ACTIVIDAD AGRARIA Y AGROINDUSTRIAL Y EL DERECHO AMBIENTAL

Leonardo Fabio Pastorino¹

RESUMEN: De las últimas sentencias comentadas para la Actualidad en Derecho Ambiental, Agrario y Recursos Naturales, que periódicamente publico desde 2006, ahora en La Ley Buenos Aires, extraigo dos que se adecuan a nuestros congresos por tratar tanto normas provinciales como su interpretación por el Poder Judicial provincial. Los temas tratados son novedosos. En el primer caso la importancia sobresale porque se trata de una decisión de la Suprema Corte que debe resolver sobre un caso de actividad forestal cuestionada por sus impactos ambientales, debiendo el tribunal repasar un sinnúmero de leyes provinciales de naturaleza agroambiental. La otra sentencia, si bien es de una cámara de apelación, comparte la temática, efectos ambientales (al ambiente en sí mismo y a los particulares) por una actividad de transformación de cereales, pero también relevante porque plantea el caso de la recomposición y también introduce la aplicación de los daños punitivos.

1) Introducción

Comencé a observar aves en pretendida forma sistemática entre los 6 y 7 años. Dos o tres años más tarde con mi amigo de la infancia Flavio Moschione hoy reconocido

¹ Prof. Titular Ordinario de Derecho Agrario, Cátedra I, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales y Prof. Titular Ordinario de Legislación de los Recursos Naturales Renovables, Facultad de Ciencias Naturales y Museo, Universidad Nacional de La Plata. Director del Proyecto de Investigación J11/137 “Ambiente y Derecho: respuestas ante la crisis del agua”. pastorinoleonardo@yahoo.com.ar

ornitólogo e investigador que cumple funciones en Parques Nacionales aquí en Salta, habíamos formado un “Club de Ciencias” involucrando a sus hermanos menores y estudiábamos de memoria una lista de nombres científicos de aves de Berisso, muchos de ellos absolutamente desconocidos para nosotros. No buscábamos para ir “al campo” a observar aves extensiones cultivadas, al contrario, huíamos de la monotonía de esas extensas y casi infinitas plantaciones de girasoles o maíz u otros cultivos que, como mucho, atraían palomas y cotorras condenadas a ser calificadas jurídicamente de “plagas”. Si visitábamos Tucumán, la tierra del pionero ornitólogo Olrog, no se nos ocurría introducimos en los cañaverales, verdaderos monocultivos de caña que, justo es reconocer, brindan seguramente una extraña vivencia a quien en ellos se inmersa, pero aves, pocas. No!, queríamos conocer cada uno de los riquísimos ambientes que en tan poco territorio contiene la provincia. Cuando visitaba Entre Ríos para compartir y absorber las experiencias de otro gran ornitólogo, el doctor Zelich, amaba llegar caminando a su casa, luego de esos 6 kilómetros de puro campo, con algunos montecillos y un verde seco paisaje ondulado por las cuchillas entremezclado del colorado de sus tierras llenas de ágatas. Deseaba en esas caminatas que se me haga viva la presencia del escondido crespín y mientras eso no ocurría afinaba el oído para distinguir los cantos de más de cien especies posibles de aves que allí podrían aparecer. Nunca se me ocurrió arrancar para el otro lado de la ruta 14 donde ya se empezaba a forestar con pino y eucalipto para celulosa. Ese manto también verde, quizás hasta de un verde más brillante y llamativo sólo me ofrecería en su artificiosa estructura de troncos raleados y geométricamente dispuestos el canto triste de las comunes palomas, torcaza y yerutí o como yo prefería llamarla “bumbuna”.

Quiero decir que gozando del ambiente no me resultó difícil entender lo nocivo que es el monocultivo de cualquier plantación para la biodiversidad. Que los bosques son buenos en donde siempre existieron. Que forestar de bosques donde nunca los hubo es un daño ambiental inconmensurable aunque se trate de tierras desiertas o poco ricas en diversidad porque es allí donde entre esas pocas especies se encuentran mayores adaptaciones y endemismos que no se van a ver en otros lados. En definitiva, que entre los verdes de la naturaleza, no todos los verdes son iguales ni del mismo valor. Por eso cae de maduro que una plantación de mil hectáreas o más de bosques en la rasa llanura pampeana

tiene que tener efectos ecosistémicos que ameritan ser evaluados previamente e incluso pueden justificar una ordenación territorial que totalmente excluya dicha plantación.

Claro que también en esos viajes imborrables por Entre Ríos, prefería que nadie me levante para llegar a dedo al Parque Nacional El Palmar, porque por el camino habían otros monocultivos, los arrozales que si bien alteraban absolutamente el sistema, también se plagaban de millares de capuchinos de diferentes especies y allí, en esa mezcla de especies tan afines, identificables sólo por los diseños de colores especialmente en cabeza, garganta y cuello (sus capuchas) el mismo Zelich había encontrado una especie nueva para la ciencia que pocos podían reencontrar. Es decir, también esos grandes impactos que la actividad del hombre genera en el ambiente provoca alteraciones que interrumpen el llamado “curso natural de las cosas” y ofrece la oportunidad de fenómenos o impactos que puedan ser positivos. Todo un mundo de difícil comprensión y que invita a múltiples opiniones y debates. A lo que se suma el problema de las dimensiones, es decir, actividades “naturales” que podrían no ser nocivas en cierta proporción o utilizando unas pocas hectáreas pueden tener un impacto mucho mayor si se cubren muchas más hectáreas o se interrumpen los corredores naturales que utilizan las distintas especies. Y también el problema de la ubicación, porque capaz la actividad no es contaminante, tampoco ocupa pocas hectáreas y entonces en principio podría ser tolerada, pero se pretende hacer en un sitio único, por ejemplo una pingüinera o un lugar de congregación o provisión de aves migratorias.

Creo que resulta obvio entender mi maravilla cuando en el cuarto año de la carrera me encontré que en el programa de Derecho Agrario la primer bolilla del programa de Vivanco, de 1983, no estaba dedicada a definiciones doctrinarias iusagraristas ni a conceptos jurídicos de actividad agraria ni a institutos como la reforma agraria ni a contenidos o principios como la función social de la tierra, sino a “la ecología” y a entender las leyes que rigen los sistemas naturales, cadenas tróficas, cadena de energía, ciclo del agua, etc. etc.

En un juego de palabras relacionadas a mis afecciones, empecé siendo una “rara avis” en el derecho agrario queriendo relacionar la actividad agraria con la protección ambiental.

Guiado por Alberto Germanò, en el 2000, realicé mi investigación en el Instituto de Derecho Agrario Internacional y Comparado de Florencia sobre *El daño ambiental*

producido por la actividad agropecuaria y en 2005 publiqué mi tesis doctoral sobre *El daño al ambiente* la que comienza tratando de hacer notar las dificultades que tenemos para comprender el funcionamiento de los sistemas naturales.

Un poco por estos sintéticos antecedentes personales es que me permito cometer otro pecado de vanidad, citando en las sentencias escogidas, dictadas 15 diez años después de aquella última obra, algunos párrafos que refieren a trabajos míos, recordando que, cuando la senda es la correcta cualquier esfuerzo intelectual en progreso de las ideas brinda, en algún momento, sus frutos.

2) Que el bosque (implantado) no tape el impacto

La Suprema Corte decidió, en interesante y extensa sentencia de fecha 11 de febrero de 2016, los autos “Cabaleiro, Luis Fernando c/Papel Prensa S.A. s/Amparo”, C. 117.088 que interesa en su conjunto porque, en primer lugar, lo que se juzga es una neta actividad agraria, como lo es la forestación, la que, más allá de su aparente naturalidad también puede producir impactos negativos al ambiente por sí misma, como puede requerir de insumos que los produzcan. También porque el relato pone en evidencia cómo a través de actividades agrarias pueden afectarse grandes extensiones de territorio y el ambiente natural implícito.

En segundo lugar, es llamativo el diálogo que se corrige en la sentencia entre el lenguaje y la interpretación jurídica con el lenguaje y los conocimientos científicos. La demandada se defiende haciendo una discriminación arbitraria sobre los bosques implantados que podrían o no producir impacto en base a criterios que, si bien no están enunciados y mucho menos fundamentados técnicamente, derivan de subjetividades de origen cultural como lo hace al decir que, seguramente, cuando la norma quiso exigir la evaluación de impactos de la implantación de grandes extensiones de tierra se referiría a situaciones como las de la costa atlántica y no a la forestación en una zona interior de la llanura pampeana.

En tercer lugar, la sentencia pone en real situación de aplicabilidad una cantidad de normas provenientes del régimen de la forestación, de los agroquímicos y de la ley general del ambiente, lo que permite profundizar el estudio del derecho ambiental sectorial

provincial, poco enseñado y conocido en general a la vez que demuestra que más allá de la baja aplicación de muchas normas de este tipo, llegado el caso a la Justicia, ésta rescatará el carácter obligatorio de dichas disposiciones.

Debido a la cantidad de temas y lo extenso de la sentencia, extraigo los párrafos más sobresalientes:

a) *Obligatoriedad del estudio de impacto ambiental en forestaciones de más de cien hectáreas*

“Por otra parte, la resolución 1392/2001 (resolución Conjunta del Secretario de la ex Secretaría de Política Ambiental y del Presidente del ex Consejo Provincial de Desarrollo Forestal y Urbano Sustentable) establece que ‘los proyectos mayores a cien (100) hectáreas de superficie a forestar deberán presentar ante la Secretaría de Política Ambiental y previo al inicio del emprendimiento un estudio de impacto ambiental...’ (art. 5º, fs. 842)” (del voto de Genoud).

En tanto que el doctor Hitters recordó que “el art. 23 de la ley 11.723 ... en su parte pertinente, establece que “si un proyecto de los comprendidos en el presente Capítulo comenzara a ejecutarse sin haber obtenido previamente la Declaración de Impacto Ambiental, deberá ser suspendido por la autoridad ambiental provincial o municipal correspondiente. En el supuesto en que éstas omitieran actuar, el proyecto podrá ser suspendido por cualquier autoridad judicial con competencia territorial sin perjuicio de la responsabilidad a que hubiere lugar”.

b) *Envases de agroquímicos: obligatoriedad de tratamiento conforme la ley 11.720 de residuos especiales*

“También la Provincia cuenta con la ley 11.720 que legisla sobre la disposición final de residuos especiales y establece, en su Anexo I, las categorías de desechos que hay que controlar (‘Desechos resultantes de la producción, la preparación y utilización de biocidas y productos fitosanitarios’)” (del voto de Genoud).

c) *Ámbito y alcance del principio de prevención*

“De lo descripto (se refiere al artículo 4 de la ley 25.675 que enuncia los principios del derecho ambiental) se desprende que la norma permite adoptar conductas preventivas para evitar el acaecimiento de un hecho que tenga la entidad de provocar un daño al ambiente. Adquiere especial relevancia ese principio cuando se analiza, a la luz de la normativa ambiental nacional y provincial, la acción antrópica que tiene finalidad lucrativa”.

“Por otro lado, también, se faculta a tomar medidas correctivas que detengan el daño cuando ya se ha producido, evitando que siga propagándose, sin perjuicio de la recomposición ambiental que corresponde en estos casos”.

“De allí que la doctrina sostenga que existe un daño relacionado con el ambiente distinto al daño civil entre particulares”.

“Así, el profesor Leonardo Fabio Pastorino indica que en el seno de la Convención Constituyente que consagró el derecho al ambiente en el art. 41 de la Constitución nacional, se sostuvo que más que reparar el daño ambiental lo que se debía hacer era prevenirlo, agregando dicho autor: ‘Al contrario de lo que ocurre con el derecho civil, que actúa *ex post facto*, el derecho ambiental debe actuar antes de que se produzca el daño concreto. Esto otorga fundamento al principio de prevención en materia ambiental que va ligado al *principio precautorio* debido a que en estos supuestos, muchas veces no se conocen o no se perciben los perjuicios de las acciones humanas con tanta anticipación. Es decir, en lo que se refiere al daño ambiental lo importante es evitarlo’ (‘El Daño al Ambiente’, Lexis Nexis Argentina, Buenos Aires, 2005; págs. 143 y 144)”.

“Agrega además este autor que el art. 28 de la Constitución de la Provincia establece una obligación precautoria y también preventiva, a toda persona física y jurídica, de evitación de daño al ambiente que puntualiza y amplía el contenido de la norma nacional, estableciendo la responsabilidad del Estado provincial o municipal por el mal desempeño de su poder de policía pues está a su cargo el control de todas las actividades que perjudiquen al ecosistema, como también promover acciones que eviten la contaminación del aire, agua y suelo, entre otras cuestiones (ob. cit., págs. 144 y 145)” (del voto de Genoud).

d) *A favor del ambiente, ante la duda*

“Mosset Iturraspe, Hutchinson y Donna señalan las características especiales del daño ambiental en razón del bien jurídico comprometido, ya que difícilmente encaja en las clasificaciones tradicionales de daño patrimonial, extrapatrimonial, daño cierto o incierto, daño actual o futuro y daño personal o daño ajeno, resaltando la existencia de una doble estructura: la preventiva y la reparadora y la incertidumbre científica en algunos supuestos por los que en casos de duda debe estarse a favor del ambiente y de la protección de la salud (‘Daño ambiental’, Tomo I, Rubinzal-Culzoni Editores, Buenos Aires, 1999; págs. 72 a 75)” (del voto de Genoud).

e) *Diferenciación entre prevención y precaución*

“Lo primero y lo más idóneo es la prevención del daño al medio ambiente para evitar la consumación, máxime teniendo en cuenta que se trata de un bien no monetizable, es decir, no traducible en indemnizaciones y difícil de volver al estado anterior del daño. Cabe añadir que el principio de precaución refuerza la finalidad preventiva del derecho ambiental. Se diferencia de la prevención en que ésta se desarrolla en un ámbito de incertidumbre acerca de si el daño va o no a producirse en un caso concreto pero no existen dudas científicas sobre la peligrosidad de la cosa o actividad, es decir sobre si existe el riesgo de que un determinado daño pueda o no tener lugar. En cambio la precaución requiere de la existencia de peligro de que se produzca un daño grave o irreversible y también incertidumbre científica acerca de que ese daño pueda tener lugar, situación que no podrá impedir la adopción de medidas eficaces para evitar la degradación del ambiente y debe concretarse siempre bajo el imperio de la regla de la proporcionalidad entre el costo económico social y la medida a adoptar, fiel expresión de los principios de sustentabilidad, responsabilidad y equidad intergeneracional” (del voto de Genoud).

f) *Resolución*

Teniendo en cuenta una serie de incumplimientos y, en especial, la falta de una Evaluación de Impacto Ambiental, la sentencia ordena el “cese de la actividad forestal ... hasta tanto acredite en autos haber obtenido la pertinente Declaración de Impacto Ambiental por parte de la autoridad competente (arts. 10 a 24, ley 11.723)”, como si el ciclo biológico de los árboles se pudiera hacer cesar o discontinuar y como si el formalismo del acto administrativo “declaración de impacto ambiental” pueda obtenerse ex post facto a la plantación y el procedimiento de evaluación de impacto ambiental no sería obligatoriamente “previo”. Observaciones relevantes si se sigue un poco con más detalle el debate acerca de la necesidad de realizar una EIA para forestaciones de más de 1000 has que, seguramente se han impuesto normativamente teniendo en cuenta el potencial que dicha plantación pueda tener en la alteración de los ecosistemas naturales.

3. Daños ambientales por la actividad agroindustrial

En este caso se trata de una demanda por cese de daño ambiental y remediación instaurada por vecinos del Barrio la Construcción de Pergamino, contra una industria de procesamiento de maíz por afectaciones al aire debido a olores fuertes y presencia de material particulado; al agua, por las alteraciones que provocaba la cantidad de material orgánico que se arrojaba sin ningún tipo de tratamiento y al suelo por relleno de cavas. En el planteo original los vecinos también reclamaron indemnización por los daños a la propiedad, salud, moral, daños individuales que los distintos jueces se ocuparon de distinguir de los anteriormente citados. (CCyC de Junín; 19 de noviembre de 2015, “Décima, Julia Graciela y otros” N° 42.812 y “Díaz, Zulema y otros” N° 42.729 contra Productos de Maíz S.A. –Ingredion Argentina S.A.-, con primer voto del doctor Juan J. Guardiola y adhesión del doctor Ricardo M. Castro Durán).

a) Daño al ambiente en sí mismo, diferenciación con los daños individuales

“La Dra. Morando, con acierto, dividió la contienda y limitó la sentencia a la comprobación del daño al ambiente en sí mismo, y a ordenar el cese y remediación.

Digo con acierto, porque la complejidad de la prueba ofrecida en miras de la acreditación de los daños individuales, (teniendo en cuenta la gran cantidad de actores) hace presumir que su producción demorará aún más la ya retrasada tutela ambiental (no olvidemos que la causa se inició en el año 2.001).

Siendo ello así, encuentro acertado el diferimiento del tratamiento de los reclamos individuales que los actores pretenden.

La distinción entre las diferentes categorías de daños ambientales, también permite desvirtuar el agravio de la parte demandada referido a la omisión de análisis de la salud de la población y sobre ‘la existencia efectiva de las numerosas enfermedades listadas en la población aledaña a la Planta’; toda vez que la existencia del daño al ambiente, en los términos del art. 27 de la ley 25.675, no depende de la comprobación de tales extremos.

Leonardo F. Pastorino distingue dos categorías: ‘Los daños al ambiente en sí mismo son aquellos que no dependen de la afectación concreta a la salud, vida o bienes de los seres humanos. Se trata del instituto más novedoso que nace con el auge del interés por la protección ambiental en las últimas décadas del siglo pasado. En cambio, los daños que por reflejo de ese ambiente deteriorado se transmiten y representan como daños concretos a las personas y sus bienes son aquellos alcanzados por la legislación civil clásica, que, de todos modos y ante la complejidad del fenómeno ambiental, debe modificar sus institutos y principios interpretativos. Considero que la ley 25675 legisla únicamente sobre los primeros, a los que llama daños al ambiente de incidencia colectiva’ (‘El daño ambiental en la ley 25675’, JA 2004-II-1304)’.

b) Definición del daño al ambiente en sí mismo con criterio científico para definir qué se entiende por daño relevante y diferenciarlo de un simple impacto negativo

Pastorino afirma que: ‘Lo que se trata en el daño ambiental son las alteraciones provenientes de las actividades humanas. Pero como toda actividad humana altera el ambiente –piénsese incluso en la agricultura-, lo verdaderamente importante es detectar el umbral que delimita la capacidad de carga del ambiente mismo para soportar estos

impactos menores sin romper los equilibrios necesarios que consiente la conservación del mismo, en tanto tal. Considero que es este sentido, con la apoyatura de los peritos técnicos, es que debe evaluarse la palabra “relevante”, no dejándola a la libre interpretación subjetiva del juzgador.” (ob.cit.)”

c) Principio de congruencia, rol del juez y obligación de actuar preventivamente

“Así, expone Pastorino que: “Lamentablemente, se debería haber observado con mayor detenimiento el rol y la consideración que la prevención ya ha tenido en la jurisprudencia ambiental. Tal vez así la enunciación del art. 32 referida a la capacidad del juez de extender su fallo a cuestiones no sometidas expresamente por las partes- vetada por haber sido considerada norma contradictoria con el principio de congruencia- podría haber sido formulada de modo tal de hacer entender que no existe ataque a tal principio sino que se trata del ejercicio mismo de la función del juez el adoptar medidas suficientes para prevenir mayores daños o resolver cuestiones que en un futuro pudieran ocasionar los mismos’ (ob. cit. pág. 1306)”.

“En mismo sentido, la sala 2º de la Cámara Federal de La Plata resolvió que: ‘el tratamiento de los temas de derecho ambiental requiere una participación activa de la judicatura, la que si bien, de alguna manera, pudiera afectar el clásico principio de congruencia, en definitiva se traduce en un obrar preventivo acorde con la naturaleza de los derechos afectados y a la medida de sus requerimientos. En este sentido, las medidas de carácter preventivo destinadas a evitar daños futuros no transgreden ni quiebran el principio de congruencia propio del derecho decimonónico y iusprivatista del siglo pasado, cuyas reglas se han visto notoriamente superadas por las modernas tendencias a nivel internacional en favor de los derechos fundamentales del hombre, como son el derecho a la salud y a un ambiente sano. Frente a ello, en uso de los poderes-deberes conferidos por el artículo 32 de la Ley General del Ambiente 25.675, en orden a la dirección del proceso y la prueba de los hechos que dañan al ambiente, y que permiten la adopción, aun de oficio, de medidas preventivas urgentes... corresponde ordenar al juez de primera instancia ejercer el control y requerir una serie de informes, todo ello, sin perjuicio de las eventuales responsabilidades en que pueda incurrir la demandada...’ (28/10/2003, ‘Asociación

Coordinadora de Usuarios, Consumidores y Contribuyentes c. Enre-Edesur, s/Cese de obra de cableado y traslado de Subestación Transformadora – Incidente’, en ElDial.com)”.

d) *Daños punitivos y su asimilación con el daño moral colectivo*

“La reparación por daños punitivos cumpliría, entonces, una función de referencia para quienes intenten cometer daños contra el medio ambiente: una vez que se condene a un contaminador, quienes intenten repetir esa conducta sabrían que ante un acto que viole la normativa ambiental, no solamente deberían responder por los daños y perjuicios que ocasionen, incluyendo la reparación ecológica, sino que, además, tendrían que pagar un costo extra en concepto de multa. Este volumen económico al que debería hacerse frente resultaría sensiblemente mayor al que generaría la inversión en nuevas tecnologías, tratamiento de emisiones y efluentes, etc.” (‘Los daños punitivos y el derecho ambiental’, diciembre de 2004, elDial.com, DC43A; también postulan su aplicación en materia ambiental: Kemelmajer de Carlucci, en ob. cit, pág. 17; y Caferrata en ‘Los daños al ambiente y su reparación’, en Revista de derecho de daños, 2008-3, pág. 193; Brun, Carlos A. en “¿Hacia un derecho de daños preventivo y sancionador? (Especial referencia a los llamados ‘daños punitivos’), publicado en: DJ2004-3, 1228; Simari, Virginia en ‘La respuesta del Derecho Civil a una realidad cambiante’ publicado en: LL Sup. Act. 20/10/2009, 1)”.

A todo evento, no existe duda para la mayoría de la doctrina que el daño moral colectivo es resarcible en este tipo de juicios en el que está en juego la afectación de intereses colectivos (desde que fuera receptado en el caso de ‘Las nereidas’ de la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Azul, del LXV 22/10/1996, ha recibido un gran apoyo doctrinario, vgr. Trigo Represas en ‘Un caso de daño moral colectivo’, ED 171-374; Kemelmajer ob. cit. págs. 8/9; Cafferatta en ‘Naturaleza del daño moral ambiental colectivo’ LLC 2006, 1), y este instituto, para otros, a rigor de verdad procura sustituir o reemplazar a los daños punitivos (Saux y Pizarro, citados por Jorge Mario Galdós, en ‘Daño moral colectivo, daños punitivos y legitimación procesal activa’, Revista Derecho de Daños, ed. Rubinzal-Culzoni, nro.6, pág.129)”.

“El daño punitivo ha sido definido como ‘sumas de dinero que los tribunales mandan a pagar a la víctima de ciertos ilícitos, que se suman a las indemnizaciones por daños realmente experimentados por el damnificado, que están destinados a punir graves inconductas del demandado y a prevenir hechos similares en el futuro’ (Ramón D. Pizarro, ‘Daños punitivos’, en “Derecho de daños, Ed. La Rocca, año 193, págs. 291/292)”.

e) *Regulación de honorarios*

“Digo ello, puesto que teniendo en cuenta la especial naturaleza de los derechos tutelados, y la finalidad de la pretensión receptada, que no es otra que la comprobación del daño ambiental colectivo, su cese y recomposición, entiendo que estamos en presencia de un proceso sin contenido patrimonial; y por esta razón, los honorarios deberán ser tarifados teniendo en consideración lo dispuesto por el art. 16 del dec. Ley 8904, sin perjuicio de valorar, como una pauta más, la importancia económica de las tareas de recomposición –sin que resulte necesaria su determinación exacta-, al igual que la sanción punitiva impuesta”.